



GOBIERNO
de
CANTABRIA



CONSEJO DE GOBIERNO

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD: SECRETARÍA GENERAL

14 AGO. 2019

ORDINARIA

Año 2.019

Día

Sesión

EL GOBIERNO DE CANTABRIA, en la reunión reseñada, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Vistos los expedientes relativos al encargo a medio propio para la recuperación del área asociada a la Fuente-Lavadero de la "Regulesía" en Elechas y al encargo a medio propio para el apoyo al uso público en la vertiente cántabra del Parque Nacional de los Picos de Europa, así como el procedimiento de discrepancia seguido frente al informe de la Intervención General de fecha 6 de junio de 2019 por el que se devuelven sin fiscalizar los citados expedientes por encontrarse el Gobierno en funciones, previo informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico en virtud del artículo 14.m) de la Ley 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, y de conformidad con lo establecido en el artículo 147.b) de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, se emite el siguiente **ACUERDO**, sobre la base de los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Una vez recabados los informes de la Asesoría Jurídica de fechas 5 y 29 de abril de 2019 y de la Dirección General del Servicio Jurídico de 20 de mayo de 2019, sobre los encargos a medio propio indicados en el encabezado, mediante NRI del Jefe de Sección de Gestión Económica de la Consejería de referencia se remiten los expedientes para su fiscalización previa a la Intervención General, fecha registro de entrada 31 de mayo de 2019.

SEGUNDO.- Con fecha 11 de junio de 2019 se registra de entrada en el registro auxiliar de la Secretaría General de la Consejería de referencia informe de la Subdirectora General de la Intervención y Fiscalización por medio del cual se devuelven sin fiscalizar los expedientes por lo siguiente, textualmente:

"[...] de conformidad con lo establecido en los artículos 19.2 del Estatuto de Autonomía, y 26 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y el Sector Público de la Comunidad Autónoma de

Cantabria, y visto el informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico el 31 de mayo de 2019, al no considerarse su tramitación necesaria para el funcionamiento normal de los servicios públicos en el período actual de Gobierno en funciones y dado que no se encuentra fundamentada en el expediente su urgencia debidamente justificada o razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifiquen.

En su caso, dichos extremos deberán remitirse debidamente motivados y, siguiendo el mismo criterio fijado por la Comisión de Secretarios General del día 28 de mayo de 2019 respecto a los asuntos a someter a Consejo de Gobierno, con informe de la Asesoría Jurídica del centro directivo.

Lo que se pone en conocimiento de esa Secretaría General a los efectos oportunos".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La cuestión objeto de discrepancia surge como consecuencia de la entrada del Gobierno cesante en funciones tras las recientes elecciones autonómicas, considerando la Intervención General en su informe de 6 de junio de 2019 que, no resulta necesaria la tramitación de los expedientes, cuya fiscalización previa se interesa por la Secretaría General de la, entonces, Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación (actualmente Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), para el normal funcionamiento de los servicios públicos en el período actual de Gobierno en funciones, considerando además que para su debida tramitación debe motivarse, bien la urgencia de su tramitación, o bien las razones de interés general que concurren para su tramitación.

Antes de entrar en el fondo del asunto es necesario hacer mención primeramente al artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía para Cantabria conforme al que: *"El Gobierno cesante continuará en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno"*. Por su parte, el artículo 26 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, relativo al Gobierno en funciones señala que:

"1. El Gobierno cesante continuará en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

2. El Gobierno en funciones deberá limitarse a adoptar las decisiones que requiera el funcionamiento normal de los servicios públicos y a propiciar el adecuado desarrollo del procedimiento de nombramiento, formación y toma de posesión del nuevo Gobierno.

3. En ningún caso, el Gobierno en funciones podrá presentar proyectos de ley al Parlamento de Cantabria, someterse a la cuestión de confianza, o ser objeto de una moción de censura, o alterar la composición del Gobierno".

Por tanto, el Gobierno cesante continuará en funciones pudiendo adoptar aquellas decisiones que *"sean necesarias para el funcionamiento normal de los servicios públicos"*, o que respondan *"al despacho ordinario de los asuntos públicos"* conforme al artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, como recientemente ha determinado la Dirección General del Servicio Jurídico en informe de 12 de junio de 2019 emitido con el fin de analizar la procedencia de someter al Consejo de Gobierno en funciones los encargos a medio propio relativos a los controles sobre el terreno FEAGA y FEADER. En el citado informe determina el Servicio Jurídico que: *"[...] En definitiva, el examen de los actos adoptados por los gobiernos en funciones ha de hacerse con extraordinaria casuística, siendo preciso examinar, caso por caso, cuando surja controversia al respecto, si el discutido tiene o no esa idoneidad en función de la decisión de que se trate, de sus consecuencias y de las circunstancias en que se deba tomar"*, con el límite de los actos de que se trate no *"impliquen una nueva orientación política o condicionen, comprometan o impidan la que deba adoptar el nuevo Gobierno"*.

En cuanto a quién corresponde efectuar este ejercicio de análisis exhaustivo caso por caso de si un concreto asunto puede o no someterse a decisión del Gobierno en funciones, es necesario acudir al artículo 28 de la Ley 5/2019, de 22 de noviembre, que en su apartado 6, atribuye a la Comisión de Secretarios Generales la competencia para examinar todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación de Consejo de Gobierno, en todo caso, en tanto no se excepciona de ningún modo el período en el que el mismo se encuentra en funciones.

Precisamente, como consecuencia de la entrada del Gobierno cesante en funciones, en reunión de 28 de mayo de 2019, como cita la Subdirectora en su informe, la Comisión de Secretarios Generales acordó que aquellos supuestos que ofrezcan dudas sobre si pueden o no someterse a decisión del Consejo de Gobierno en funciones, deben ser informados por la Dirección General del Servicio Jurídico, previo informe de la Asesoría Jurídica del centro directivo con competencia en la materia, conforme al artículo 12.2 de la Ley 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico.

En virtud de lo anteriormente expuesto, corresponde a la Comisión de Secretarios Generales determinar, previos los informes que resulten en su caso necesario, si los asuntos que se sometan a decisión del Consejo de Gobierno en funciones son o no necesarios para el funcionamiento normal de los servicios, o si responden o no al despacho ordinario de los asuntos públicos.

II

Para la formalización de los encargos a medio propio resulta preceptiva la autorización del Consejo de Gobierno, así lo dispone el artículo 91.4.b) 5º y 6º de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, como así se pone de manifiesto en los informes emitidos por la Asesoría Jurídica de la Consejería de referencia en relación con los encargos objeto de discrepancia el 5 y 29 de abril, informes a los que se adhiere la Dirección General del Servicio Jurídico mediante sendos informes de 20 de mayo.

Remitidos los expedientes para su fiscalización previa de conformidad con el artículo 140 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, estos son devueltos por la Subdirección General de Intervención y Fiscalización al considerar que

no es necesaria su tramitación para el funcionamiento normal de los servicios públicos, sin percatarse la Intervención General *que obra en los expedientes remitidos para fiscalización, sendos acuerdos de Consejo de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2019 por los que se autoriza su formalización*, por lo que decae toda la argumentación expuesta en su informe por la Intervención General, en tanto los asuntos ya cuentan con autorización del Consejo de Gobierno acordada en sesión ordinaria, con anterioridad a su entrada en funciones. Debiendo por tanto proceder la Intervención General a su fiscalización previa.

Fiscalización a la que viene obligada la Intervención General, aun en el caso de que los asuntos no se hubieran sometido aún a Consejo de Gobierno y debieran aprobarse por el Consejo de Gobierno en funciones, ello sin perjuicio de las cautelas, advertencias u observaciones complementarias que al efecto considere necesario efectuar la Intervención, en tanto que ni la Ley de Finanzas, ni el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria, de 21 de febrero de 2013, por el que se aprueba modificar el Acuerdo de Consejo de Gobierno de Cantabria, de 8 de marzo de 2007, en su redacción dada por el Acuerdo de modificación, de 29 de mayo de 2008 y posteriores, por el que se aprueba el Régimen Especial de Fiscalización e Intervención previa de Requisitos Básicos publicada por Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria el 14 de marzo de 2013, establecen excepción alguna a la fiscalización en el supuesto de que el Gobierno se encuentre en funciones.

En definitiva, sin perjuicio de las observaciones que la Intervención General pueda realizar en sus informes no existe motivo legal para no fiscalizar los expedientes al encontrarse el Gobierno en funciones.

Por lo anteriormente expuesto,

SE ACUERDA

Resolver la discrepancia planteada a favor de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Cumplase el anterior acuerdo y notifíquese en forma a SECRETARIA GENERAL DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.


Santander,
EL/LA SECRETARIO/A DEL CONSEJO

14 AGO. 2019

Fdo.: Paula Fernández Viana



INFORME QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO, A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON LA DISCREPANCIA PLANTEADA FRENTE AL INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL EN EL QUE SE DEVUELVEN SIN FISCALIZAR DOS EXPEDIENTES REFERIDOS A ENCARGOS A MEDIO PROPIO POR ENCONTRARSE EL GOBIERNO EN FUNCIONES.

Visto el expediente remitido y la legislación de aplicación al caso concreto se emite, de conformidad con lo establecido en los artículos 147.b) de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, y 14.m) de la Ley 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, el siguiente informe sobre la base de las siguientes

CONSIDERACIONES

ÚNICA.- Se adhiere a las consideraciones vertidas en el informe emitido por la Asesoría Jurídica de la Consejería de 20 de junio de 2019 obrante en el expediente administrativo y considera que sin perjuicio de las observaciones que la Intervención General pueda realizar en sus informes no existe motivo legal para no fiscalizar los expedientes por encontrarse el Gobierno en funciones.

Es todo cuanto se tiene el honor de informar, salvo superior criterio fundado en Derecho.

Santander, a la fecha de la firma electrónica.

Vº Bº

EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL

LA LETRADA

SERVICIO JURÍDICO

Fdo.: J. Vicente Mediavilla Cabo

Fdo.: Ana García - Barredo Pérez.

Firmado Por	Jose Vicente Mediavilla Cabo - Subdirector General del Servicio Jurídico-Dgsj	06/08/2019	Página 1/1
	Ana María García-barredo Perez - Letrado-Dgsj	06/08/2019	

INFORME QUE EMITE LA ASESORÍA JURÍDICA A PETICIÓN DEL SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL INFORME EMITIDO POR LA SUBDIRECTORA GENERAL DE INTERVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2019 EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES RELATIVOS AL ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA RECUPERACIÓN DEL ÁREA ASOCIADA A LA FUENTE-LAVADERO DE LA "REGULESIA" EN ELECHAS Y EL ENCARGO PARA EL APOYO AL USO PÚBLICO EN LA VERTIENTE CÁNTABRA DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA.

Vistos los expedientes mencionados en el encabezado, así como el artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, los artículos 26 y 28 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y el Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, la Ley 11/2006, de 17 de Julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, y demás normas de general y procedente de aplicación, se emite **INFORME**, en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Una vez recabados los informes de la Asesoría Jurídica de fechas 5 y 29 de abril de 2019 y de la Dirección General del Servicio Jurídico de 20 de mayo de 2019, sobre los encargos a medio propio indicados en el encabezado, mediante NRI del Jefe de Sección de Gestión Económica de esta Consejería se remiten los expedientes para su fiscalización previa a la Intervención General, fecha registro de entrada 31 de mayo de 2019.

SEGUNDO.- Con fecha 11 de junio de 2019 se registra de entrada en el registro auxiliar de la Secretaría General de esta Consejería informe de la Subdirectora General de la Intervención y Fiscalización por medio del cual se devuelven sin fiscalizar los expedientes por lo siguiente, textualmente:

"[...] de conformidad con lo establecido en los artículos 19.2 del Estatuto de Autonomía, y 26 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y visto el informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico el 31 de mayo de 2019, al no considerarse su tramitación necesaria para el funcionamiento normal de los servicios públicos en el período actual de Gobierno en funciones y dado que no se encuentra fundamentada en el expediente su urgencia debidamente justificada o razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifiquen.

En su caso, dichos extremos deberán remitirse debidamente motivados y, siguiendo el mismo criterio fijado por la Comisión de Secretarios General del día 28 de mayo de 2019 respecto a los asuntos a someter a Consejo de Gobierno, con informe de la Asesoría Jurídica del centro directivo

Lo que se pone en conocimiento de esa Secretaría General a los efectos oportunos"

TERCERO.- Que no estando de acuerdo con los argumentos esgrimidos por la Intervención General, se interesa por parte de la Secretaría General de esta Consejería plantear discrepancia al Consejo de Gobierno previo informe de la Dirección General del Servicio Jurídico al amparo del artículo 147.b) de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 147 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria establece la posibilidad de plantear discrepancia motivada, en el caso de no aceptarse el reparo formulado por la Intervención.

Si bien en el supuesto que nos ocupa se procede por parte de la Subdirectora General de Intervención y Fiscalización, a devolver sin fiscalizar los expedientes "a los efectos oportunos", al no estar de acuerdo con el contenido del informe emitido, tal devolución produce en la práctica el mismo que efecto que la formulación de un reparo con carácter suspensivo, en consecuencia se formula la presente discrepancia, que conforme a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 147, corresponde resolver al Consejo de Gobierno, previo informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, informe preceptivo que debe ser solicitado por el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, conforme al artículo 14.m) de la Ley 11/2006, de 17 de Julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico.

II. La cuestión objeto de discrepancia surge como consecuencia de la entrada del Gobierno cesante en funciones tras las recientes elecciones autonómicas, considerando la Intervención General en su informe de 6 de junio de 2019 que, no resulta necesaria la tramitación de los expedientes, cuya fiscalización previa se interesa por la Secretaria General de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, para el normal funcionamiento de los servicios públicos en el periodo actual de Gobierno en funciones, considerando además que para su debida tramitación debe motivarse, bien la urgencia de su tramitación, o bien las razones de interés general que concurren para su tramitación.

Antes de entrar en el fondo del asunto es necesario hacer mención primeramente al artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía para Cantabria conforme al que: "*El Gobierno cesante continuará en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno*". Por su parte, el artículo 26 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, relativo al Gobierno en funciones señala que:

- "1. El Gobierno cesante continuará en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
2. El Gobierno en funciones deberá limitarse a adoptar las decisiones que requiera el funcionamiento normal de los servicios públicos y a propiciar el adecuado desarrollo del procedimiento de nombramiento, formación y toma de posesión del nuevo Gobierno.
3. En ningún caso, el Gobierno en funciones podrá presentar proyectos de ley al Parlamento de Cantabria, someterse a la cuestión de confianza, o ser objeto de una moción de censura, o alterar la composición del Gobierno".

Por tanto, el Gobierno cesante continuará en funciones pudiendo adoptar aquellas decisiones que "*sean necesarias para el funcionamiento normal de los servicios públicos*", o que respondan "*al despacho ordinario de los asuntos públicos*" conforme al artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, como recientemente a determinado la Dirección General del Servicio Jurídico en informe de 12 de junio de 2019 emitido precisamente a instancia de esta Secretaría General con el fin de analizar la procedencia de someter al Consejo de Gobierno en funciones los encargos a medio propio relativos a los

controles sobre el terreno FEAGA y FEADER, en el citado informe determina el Servicio Jurídico que: "[...] En definitiva, el examen de los actos adoptados por los gobiernos en funciones ha de hacerse con extraordinaria casuística, siendo "preciso examinar, caso por caso, cuando surja controversia al respecto, si el discutido tiene o no esa idoneidad en función de la decisión de que se trate, de sus consecuencias y de las circunstancias en que se deba tomar", con el límite de los actos de que se trate no "impliquen una nueva orientación política o condicionen, comprometan o impidan la que deba adoptar el nuevo Gobierno".

En cuanto a quién corresponde efectuar este ejercicio de análisis exhaustivo caso por caso de si un concreto asunto puede o no someterse a decisión del Gobierno en funciones, es necesario acudir al artículo 28 de la Ley 5/2019, de 22 de noviembre, que en su apartado 6, atribuye a la Comisión de Secretarios Generales la competencia para examinar todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación de Consejo de Gobierno, en todo caso, en tanto no se excepciona de ningún modo el periodo en el que el mismo se encuentra en funciones. Precisamente, como consecuencia de la entrada del Gobierno cesante en funciones, en reunión de 28 de mayo de 2019, como cita la Subdirectora en su informe, la Comisión de Secretarios Generales acordó que aquellos supuestos que ofrezcan dudas sobre si pueden o no someterse a decisión del Consejo de Gobierno en funciones, deben ser informados por la Dirección General del Servicio Jurídico, previo informe de la Asesoría Jurídica del centro directivo con competencia en la materia, conforme al artículo 12.2 de la Ley 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico.

En virtud de lo anteriormente expuesto, corresponde a la Comisión de Secretarios Generales determinar, previos los informes que resulten en su caso necesario, si los asuntos que se sometan a decisión del Consejo de Gobierno en funciones son o no necesarios para el funcionamiento normal de los servicios, o si responden o no al despacho ordinario de los asuntos públicos.

III.- Sentado lo anterior, entramos al análisis de los supuestos objeto de discrepancia.

Efectivamente, para la formalización de los encargos a medio propio resulta preceptiva la autorización del Consejo de Gobierno, así lo dispone el artículo 91.4.b) 5º y 6º de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, como así se pone de manifiesto en los informes emitidos por esta Asesoría Jurídica en relación con los encargos objeto de discrepancia el 5 y 29 de abril, informes a los que se adhiere la Dirección General del Servicio Jurídico mediante sendos informes de 20 de mayo.

Remitidos los expedientes para su fiscalización previa de conformidad con el artículo 140 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, como venimos analizando son devueltos por la Subdirección General por, reiteramos, considera la Intervención General que no es necesaria su tramitación para el funcionamiento normal de los servicios públicos, sin percatarse la Intervención General que obra en los expedientes remitidos para fiscalización, sendos acuerdos de Consejo de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2019 por los que se autoriza su formalización, por lo que decae toda la argumentación expuesta en su informe por la Intervención General, en tanto los asuntos ya cuentan con autorización del Consejo de Gobierno acordada en sesión ordinaria, con anterioridad a su entrada en funciones. Debiendo por tanto proceder la Intervención General a su fiscalización previa.

N/Ref.- 12196

Fiscalización a la que viene obligada la Intervención General, aun en el caso de que los asuntos no se hubieran sometido aún a Consejo de Gobierno y debieran aprobarse por el Consejo de Gobierno en funciones, ello sin perjuicio de las cautelas, advertencias u observaciones complementarias que al efecto considere necesario efectuar la Intervención, en tanto que ni la Ley de Finanzas, ni el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria, de 21 de febrero de 2013, por el que se aprueba modificar el Acuerdo de Consejo de Gobierno de Cantabria, de 8 de marzo de 2007, en su redacción dada por el Acuerdo de modificación, de 29 de mayo de 2008 y posteriores, por el que se aprueba el Régimen Especial de Fiscalización e Intervención previa de Requisitos Básicos publicada por Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria el 14 de marzo de 2013, establecen excepción alguna a la fiscalización en el supuesto de que el Gobierno se encuentre en funciones.

IV.- Finalmente conviene aclarar que el Consejero se encuentra habilitado por autorización del Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2019 para suscribir y formalizar los encargos a medio propio objeto de controversia. Dado que actualmente el Consejero se encuentra en funciones, una vez fiscalizados los expedientes, con carácter previo a la suscripción y formalización de los encargos, deberá analizar cada uno de los encargos al objeto de determinar si procede su suscripción y formalización por encontrarse en funciones, lo que realizará previos los informes que su caso considere oportuno recabar.

Es decir, deberá comprobar que dichos encargos responden al funcionamiento normal de los servicios públicos, o bien responden al despacho ordinario de los asuntos públicos, cuestiones éstas que no se encuentran en ningún caso sometidas a fiscalización.

Por lo expuesto,

Primero.- Procede fiscalizar los encargos a medio propio para *"la recuperación del área asociada a la fuente-lavadero de la "Regulesia" en Elechas"*, y el encargo para *"la prestación del servicio de apoyo al uso público en la vertiente cántabra del parque nacional de los picos de Europa"*, en tanto los mismos ya cuentan con autorización del Consejo de Gobierno emitida mediante acuerdo de 23 de mayo de 2019.

Segundo.- Una vez fiscalizados los expedientes, el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación en funciones, deberá analizar con carácter previo a la suscripción y formalización de los encargos, si procede continuar con su tramitación por resultar necesario para el funcionamiento normal de los servicios públicos o responder al despacho ordinario de los asuntos públicos, o por el contrario suspender la tramitación hasta que el nuevo Consejero o Consejera tome posesión del cargo.

Es cuanto cabe informar salvo superior criterio mejor fundado en derecho.

Santander, al día de la fecha de la firma electrónica
LA JEFA DE LA ASESORIA JURÍDICA
Fdo.- M^a Vicenta Ibáñez Pérez